



Multiasesorias Jurídicas
Costain



Respetable señor:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA (reparto)

(o se remita a quien corresponda)

Ciudad.

Medio de Control: Reparación Directa.
Demandantes: María Teresa García y otros.
Apoderado: Constantino Costain Flor Campo.
Demandados: **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**
Asunto: Presentación de Demanda.

Cordial Saludo;

CONSTANTINO COSTAIN FLOR CAMPO, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Florencia-Caquetá e identificado con cédula de ciudadanía No.17.639.583 expedida en Florencia-Caquetá, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No.248.009 del C.S de la J; quien dentro del presente trámite judicial funge en calidad de Apoderado Judicial de:

1. **MARÍA TERESA GARCÍA**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.161.979 expedida en el municipio de Santa Rosa de Cabal-Risaralda. (Victima Directa).
2. **BLANCA LIGIA GARCIA DE PINEDA**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.149.367 de e Santa Rosa de Cabal-Risaralda. (Madre)
3. **GLORIA INES PINEDA GARCIA**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No.25.155.212 de Santa Rosa de Cabal Risaralda. (Hermana)
4. **ROBESTIER MEJIA GARCIA**, hombre mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.094.909.472 de Bogotá D.C. (Hijo)
5. **ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA**, mujer mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.006.503.910 de Florencia-Caquetá. (Hija)



Multiasesorías Jurídicas
Costain



Personas que actúan en calidad de demandantes, y que ostenta la calidad de víctima directa la señora **MARÍA TERESA GARCÍA** y acuden como víctimas indirectas en condición de madre, hermana e hijos de la señora **MARÍA TERESA GARCÍA** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.161.979; de manera respetuosa acudo ante ustedes con el fin de presentar ante su Despacho **MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA**, conforme lo consagra el artículo 140 del C.P.A.C.A., contra la **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**, para que previo los trámites del Proceso de qué trata la Parte II, Título V, Capítulo V, arts. 179 y ss., del Código Contencioso Administrativo, se efectúen las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Declarar que **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA** es responsable administrativa, civil y patrimonialmente de la totalidad de los daños y perjuicios Morales, Materiales que fueron ocasionados a la señora **MARÍA TERESA GARCÍA** y su familia, con ocasión al mal procedimiento médico que le practicaron en **UROCAQ EU IPS** y en el **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA** de la ciudad de Florencia Caquetá.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a las entidades **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA** a RECONOCER y PAGAR a favor de los demandantes por concepto de **PERJUICIOS MORALES** ocasionados a la señora **MARÍA TERESA GARCÍA** y su familia, el valor equivalente a **CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** distribuidos de la siguiente manera:

PERJUICIOS MORALES

- Para **MARÍA TERESA GARCÍA**, obrando en calidad de Víctima Directa, el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha en que se surta el pago, o lo máximo que la jurisprudencia ha reconocido.



Multiasesorías Jurídicas
Costain



- Para **BLANCA LIGIA GARCIA DE PINEDA**, obrando en calidad de Hermana Materna de la víctima **MARÍA TERESA GARCÍA**, el equivalente a SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha en que se surta el pago, o lo máximo que la jurisprudencia ha reconocido.
- Para **GLORIA INES PINEDA GARCIA**, obrando en calidad de Hermana Materna de la víctima **MARÍA TERESA GARCÍA**, el equivalente a SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha en que se surta el pago, o lo máximo que la jurisprudencia ha reconocido.
- Para **ROBESTIER MEJIA GARCIA**, obrando en calidad de Hijo de la víctima **MARÍA TERESA GARCÍA**, el equivalente a SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha en que se surta el pago, o lo máximo que la jurisprudencia ha reconocido.
- Para **ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA**, obrando en calidad de Hija de la víctima **MARÍA TERESA GARCÍA**, el equivalente a SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha en que se surta el pago, o lo máximo que la jurisprudencia ha reconocido.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a las entidades demandadas **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA** a RECONOCER y PAGAR por concepto de **PERJUICIOS MATERIALES**, de la siguiente manera:

PERJUICIOS MATERIALES:

Lucro Cesante:

Por perjuicios materiales páguese a **MARÍA TERESA GARCÍA**, (Afectada por la falla médica), el valor de CIENTO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 100.000.000), en la modalidad de Lucro Cesante. Más indexación y corrección monetaria desde la fecha que se ocasionó el perjuicio hasta que se pague totalmente la obligación.



Multiasesorias Jurídicas
Costain



Daño Emergente:

Por daños emergentes la suma que resultare probada en el curso de la demanda, que haya pagado la señora MARIA TERESA GARCIA, como consecuencia de tal intervención gastos médicos, transporte, hospedaje, entre otras cosas.

CUARTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando a la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos o sea desde el día 21 de noviembre del 2005 hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

QUINTA: La parte demandada dará cumplimiento al fallo de sentencia, en los términos de los artículos 176, 177, 178 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTA. – EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, pagará a la totalidad de los Demandantes aquí expuestos los intereses que genere desde la fecha de su ejecutoria hasta cuando se produzca su efectivo cumplimiento; a la vez habrá de devengar los intereses previstos en los artículos 192 inciso 3, 195 numeral 4 del CPACA, se ejecutarán en los términos establecidos en el artículo 192 inciso 1 y 2 y se tramitará su pago de acuerdo a artículo 195 numerales 1, 2, 3 del CPACA.

SEPTIMA. – EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, pagara a los Demandantes las **COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO**, que se causen como consecuencia de la acción instaurada por los Demandantes, si se llegasen a oponer.

HECHOS

1. A finales del año 2019 la señora **MARIA TERESA GARCIA** comienza a presentar síntomas de lo que sería la condición precancerosa asociada con un tejido anormalmente grueso en el endometrio, enfermedad llamada **HIPERPLASIA ENDOMETRIAL ATÍPICA** que afectó su salud.



Multiasesorías Jurídicas
Costain



2. María Teresa García al presentar malestar y sangrado, se dirigió a la IPS Urocaq, donde fue atendida y valorada por el médico ELKIN, quien le ordenó realizarse una ecografía intravaginal, al realizársela dio como resultado un endometrio engrosado, procedió a enviarle un Legrado, omitiendo ordenar otro tipo de exámenes imprescindibles para tomar decisiones más acertadas.
3. El día 6 de febrero de 2020 la paciente María Teresa García, ingresa a la **E.S.P. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**, con diagnóstico de hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada; donde la médica tratante MIREYA MAHECHA MAHECHA le realiza Legrado Uterino Ginecológico más Biopsia Endometrial el día 10 de mismo mes y año; posterior a ello fue dada de alta el día 13 de febrero de 2020, con recomendación de llevar un control.
4. En aquellos días la paciente María Teresa García saca cita para control de su cirugía, manifestándole que no la podía seguir atendiendo la médica que la operó y debía sacar cita con otro médico. Siendo importante que la persona que opera siga con el control por el conocimiento que adquiere del caso en el proceso de la cirugía.
5. Posterior a ello, saca cita con el médico ELKIN DAVID CERCHIARO MARTINEZ de la E.P.S. Urocaq, una vez valorada le envía histerectomía, programándole cita para operación, luego de operarla se dan cuenta en el resultado de la Patología que la señora María Teresa García presenta Cáncer el día 01 de agosto de 2020. Remitiéndola para la ciudad de Neiva con Oncología. En la recuperación de esta cirugía, la señora María Teresa se encontraba sin acompañante y al llegar su hija solicitó urgentemente a las enfermeras que se encontraban lejos de ella, que le ayudaran con su madre porque se encontraba en estado de dolor y desesperación, presentando un color de piel totalmente pálido y sudoración fría, la atención que requería la paciente no era la adecuada, negligentemente no le habían tomado los signos y procedieron a hacerle al verla en ese estado.
6. De manera que María Teresa se dirige a la ciudad de Neiva, el Oncólogo que la atiende le expresa que su remisión fue errónea, en razón de que ella debía ser remitida era con gineoncología, inmediatamente procede a darle cita para el día siguiente con el especialista.



Multiasesorias Jurídicas
Costain



7. Al día siguiente, fue atendida por el medico Guillermo Cano, este una vez la valora, muy disgustado y preocupado le refiere a la señora María García que la debieron remitir en el primer resultado, además de que en Florencia no le ordenaron, ni le realizaron todos los exámenes que son necesarios en este tipo de casos para determinar con más certeza un diagnóstico, en la cirugía de Florencia no le sacaron los ovarios y era necesario, que no debieron operarla en Florencia, sino en Neiva; porque tanta cirugía es un riesgo para la salud de la señora García, sin embargo procede a ordenarle Cirugía y a realizársela, posterior a la cirugía el medico Cano le comparte a la señora María su gran preocupación por el tiempo que se habían demorado en Florencia para remitirla, dado que durante la cirugía podía encontrarse con que el cáncer hubiese hecho metástasis.

8. La señora María Teresa Cano se vio muy afectada desde el primer día de su cita, presentó alta tensión y su corazón estaba alterado, generándole mucha preocupación a su madre, hermana e hijos, quienes ya se encuentran debidamente identificados, ostentando la calidad de Víctimas Indirectas dentro del trámite de la referencia; durante todo este difícil proceso, la familia sobrellevo un inmenso sufrimiento por la enfermedad de la señora María Teresa, debido el gran amor y afecto que le tienen, pues según lo relatado, fue repentino verla bien de salud y de repente comenzar a verla delicada por la intervención quirúrgica a la que fue sometida. Durante la recuperación de la primera cirugía presentaba constante desmayos, y al enterarse la familia que su madre, hija y hermana era diagnosticada con cáncer les generó un impacto y tristeza profunda, desde ese momento el hogar permanecía en silencio, puesto que se encontraban totalmente afectados; en este triste episodio de sus vidas casi no dormían, ni hablaban y, por lo contrario, lloraban constantemente. La señora MARIA TERESA GARCIA es madre cabeza de familia, es quien suple las necesidades del hogar conformado por su madre, hermana y sus dos hijos. Al ser informados del mal proceder del médico ELKIN Y MIREYA MAHECHA les generó un profundo dolor, llegando a pensar que su amada hija, madre y hermana no soportaría la segunda cirugía que le realizaron. Sumado a ello el asunto de la Pandemia generó y aumentó la preocupación de todos, por el delicado estado de salud de la señora María Teresa.

De acuerdo a lo esbozado anteriormente, respetuosamente me permito dirigirme a su Despacho con el fin de realizar las siguientes:



Multiasesorias Jurídicas
Costain



FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las entidades demandadas vulneraron las siguientes disposiciones superiores y legales:

Las disposiciones de los Artículos 6 y 90 de la C.P.

En su **artículo 6:**

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la **Constitución** y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”

En su **artículo 90:**

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”

Así mismo lo consagrado en el Artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados



Multiasesorías Jurídicas
Costain



particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”

De igual forma lo incoado en la Ley 640 de 2001 artículos 1, 2, 3, 4, 15, 20, 23, 24, 25 y 37; la Ley 1285 de enero 22 de 2009: artículo 13 (que aprobó como artículo nuevo el 42 A de la Ley 270 de 1996).

JURISPRUDENCIA:

- Sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp.15772, MP. Ruth Stella Correa
- Sentencia del 14 de mayo de dos mil catorce 2014 Consejera pon: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ. Rad: (30724).
- Sentencia del 29 de abril de dos mil quince 2015 Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO, Rad: (25574).
- Sentencia del 3 de octubre de 2016, Rad 1999-02059-01(40057), Consejero P: RAMIRO PAZOS GUERRERO.
- Sentencia del 26 de febrero de 2018, Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Sin perjuicio del régimen de responsabilidad que pueda surgir en el presente caso, el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que la aplicación de otro régimen de responsabilidad patrimonial distinto al invocado en la demanda, tiene su causa en el principio *iura novit curia*.

Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó que en forma excepcional, cuando no se juzgue la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, *"sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante"*.



Multiasesorias Jurídicas
Costain



Nuestra Carta Política, en su artículo 1, concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política en la última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas. La Carta Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de justicia, equidad, solidaridad, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber



Multiasesorias Jurídicas
Costain



y obligación de reparación. De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuricidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuricidad objetiva, que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR FALLA DEL SERVICIO.

La responsabilidad por la deficiente o nula prestación del servicio médico también puede generar responsabilidad patrimonial al Estado, aunque no se cause un daño a la salud de los pacientes, cuando tales fallas constituyan en sí mismas la vulneración de otros de sus derechos o intereses jurídicos, como el de la prestación eficiente del servicio. La Sala, en jurisprudencia que se reitera, ha considerado que son imputables al Estado los daños sufridos por los pacientes a quienes no se brinde un servicio médico eficiente y oportuno, aunque no se acredite que esas fallas hubieran generado la agravación de las condiciones de su salud, es decir, que la falla en la prestación del servicio se confunde con el daño mismo. En síntesis, el Estado es patrimonialmente responsable de los daños que se deriven por la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, pero también es responsable del daño aún en eventos en los que no se demuestra esa relación causal, pero queda acreditado que la prestación asistencial no le fue brindada al paciente de manera diligente, utilizando todos los medios técnicos científicos de los que deben disponer las entidades médicas estatales, de acuerdo con su nivel de complejidad, o no se remite oportunamente al paciente, a un centro de mayor nivel, porque esas fallas vulneran su derecho a la salud.

Se ejercita en este proceso el medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el que tiene toda persona interesada, para demandar la



Multiasesorías Jurídicas
Costain



reparación del daño originado en los hechos, omisiones u operaciones de la Administración Pública, entre otras.

“La falla del servicio ha sido y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado. En efecto el daño es causado por el incumplimiento de una obligación a su cargo, o por el cumplimiento tardío, o la prestación irregular de dicho contenido obligacional. Y es que debemos entender que al Estado se le impone la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad”. En efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual.

La falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía

LA OMISIÓN COMO FACTOR DE FALLA EN EL SERVICIO.

“El mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ” debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la



Multiasesorias Jurídicas
Costain



administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”, así, las obligaciones que están a cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

La falla del servicio se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.

La falla en el servicio se desprende de la prestación de un servicio estatal, que al no ser prestado en la forma debida genera un daño, lo cual le ocasiona perjuicios a unos particulares que no están en la capacidad de soportarlos, de este modo se deriva que el Estado tenga que responder directamente por ese daño ocasionado cuando sea causado por una falla en el servicio, lo cual se configura como nexo.

Tal como lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores, la falla médica involucra, de una parte, el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, y de otra, todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y



Multiasesorías Jurídicas
Costain



posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades estas últimas que están a cargo del personal paramédico o administrativo. Todas estas actuaciones integran el “acto médico complejo”, que la doctrina, acogida por la Sala clasifica en: (i) actos puramente médicos; (ii) actos paramédicos, que corresponden a las acciones preparatorias del acto médico, que por lo general son llevadas a cabo por personal auxiliar, en la cual se incluyen las obligaciones de seguridad, y (iii) los actos extramédicos, que corresponden a los servicios de alojamiento y manutención del paciente, clasificación que tuvo relevancia en épocas pasadas para efectos de establecer frente a los casos concretos el régimen de responsabilidad aplicable y las cargas probatorias de las partes (...) Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio médico lo constituye el diagnóstico, porque a partir del mismo se define el tratamiento posterior. Las fallas en el diagnóstico de las enfermedades y el consecuente error en el tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida interpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la omisión de la práctica de los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto. Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los síntomas pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del servicio cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente. En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados de un error de valoración, deberá estar demostrado que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque se omitió interrogar al paciente o a su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo aquejaban; no sometió al enfermo a una valoración física completa y sería omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un determinado diagnóstico; dejó de hacerle el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, incurrió en un error inexcusable para un profesional de su especialidad.

Tenemos que la E.S.E Hospital María Inmaculada, es una entidad del municipio de Florencia Caquetá, creada mediante la Ordenanza 014 del 5 de agosto de 1994 y con la misión y funciones atribuidas del acuerdo No. 00003 del 28 de febrero de 2018. Precisamente en el artículo 3 del citado acuerdo se reitera la naturaleza de la entidad como prestadora del servicio de salud.



Multiasesorias Jurídicas
Costain



DAÑO-IMPUTACIÓN – NEXO CAUSAL

Las pruebas aportadas a esta solicitud demuestran los elementos de la responsabilidad contra E.S.E Hospital María Inmaculada, que produjo un daño a mi mandante.

La falla del servicio está demostrada con las pruebas de la omisión y falla del servicio por parte de la entidad.

Está probado que a la señora **MARIA TERESA GARCIA** le realizaron dos intervenciones quirúrgicas, siendo la primera de manera errada, ocasionándole daños a su salud, pues debido a ello, tuvo que soportar el dolor de una cirugía innecesaria y el posterior dolor que la misma ocasiona, realizándole doble cicatriz en menos de un año, generándole un desgaste a su salud, impidiéndole movilizarse con normalidad, y todas aquellas situaciones que enfrenta una persona recién operada, así mismo todas las afectaciones que esto le generó a ella y a su familia que la acompañaron en su proceso y apoyaron en esta delicada situación, soportando un dolor emocional que no tenían el deber de soportar, causado por la omisión de realizar los exámenes necesarios, negligencia y falla del servicio de **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**; razón por la cual deben responder patrimonialmente por el perjuicio ocasionado.

La falta de practica de exámenes para determinada el tratamiento adecuado para el caso, fueron las que ocasionaron el daño a la salud de la señora **MARIA TERESA GARCIA**. Dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo:

"La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos".

En el caso *sub judice*, no hay circunstancias que libere a la entidad de responsabilidad en el ejercicio de la actividad MEDICA, por el resultado de dicho proceso, el cual ocasionó un daño a la salud, generando daños materiales e inmateriales a la víctima directa y su familia.

Pero más allá, y sin necesidad de recurrir a este tipo de regímenes que se derivan de un tipo específico de obligación, en este caso, no hay duda de que el daño fue producto de una evidente falla del servicio, puesto que está demostrado que la entidad fue negligente e irresponsable y omitieron en primer momento el



Multiasesorias Jurídicas
Costain



procedimiento adecuado que la señora MARIA TERESA GARCIA requería, sin practicarle todos los exámenes necesarios para tomar la decisión correcta. Como esto no se hizo se le tuvo que someter a una segunda cirugía, que corriendo con suerte el cáncer que presentaba no hizo metástasis, siendo la segunda cirugía un éxito, pero que alertó desde el primer momento al médico por la demora en su remisión y ya había transcurrido bastante tiempo, tiempo que era un riesgo para la víctima.

De modo que fue la conducta negligente del ente demandado que desencadenó el daño que se reclama, razón por la cual se configura la Falla del servicio.

La acción de reparación directa es en consecuencia procedente ante el hecho dañoso consistente en la falla del servicio imputable a **EPS SANITAS, UROCAQ EU IPS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**. No hay lugar a exonerar a la entidad mencionada. Por lo tanto, ésta deberá indemnizar los daños causados a los demandantes por haber incurrido en una falla del servicio.

MEDIO DE CONTROL A EJERCER

Manifiesto que el Medio de Control a ejercer es el de Reparación Directa, contemplado en el Art. 140 de la Ley 1437 de 2011.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

Se trata de un proceso Contencioso Administrativo de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que debe tramitarse según lo dispuesto en la Parte II, Título V, Capítulo V, Art. 152 Núm. 5, y Arts. ss., del C.P.A.C.A. por cuya naturaleza, cuantía y lugar donde ocurrieron los hechos es ese Honorable Tribunal Administrativo el competente para conocer del mismo en primera instancia.

CUANTÍA

Al momento de la presentación de la demanda, conforme a las reglas del artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios



Multiasesorias Jurídicas
Costain



causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, **sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales**, así mismo la norma también consagra que cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor, en el caso en concreto, la mayor de las pretensiones (sin tener en cuenta los Daños Morales) corresponde a **CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLV)**, los cuales equivalen a CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000), rubro que se solicita dentro de la modalidad de DAÑOS MATERIALES.

ARANCEL JUDICIAL

Según lo establecido por La Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-169 del 19 de marzo del 2014, Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa, que resuelve Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013 '*Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones*', motivo por el cual no se aporta el requisito que antes debía estar contenido en el cuerpo de la demanda.

PRUEBAS Y ANEXOS.

Me permito adjuntar para el correspondiente valor probatorio, los siguientes documentos que tendrá como propósito sustentar lo afirmado.

Documentales

- Copias de los Registros Civiles de Nacimiento que demuestran parentescos:
 - **ROBESTIER MEJIA GARCIA**
 - **ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA**
- Copias de las Cedula de Ciudadanía de:
 - **MARÍA TERESA GARCÍA**



Multiasesorías Jurídicas
Costain



- **GLORIA INES PINEDA GARCIA**
- **ROBESTIER MEJIA GARCIA**
- **ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA**

- Reporte Epicrisis de E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA de fecha 06 de febrero, 13 de febrero de 2020.
- Copia de Historia Clínica de Avicena No. 25161979.
- Copia de poderes de representación.
- Copia de Constancia de no Conciliación, emitida el 23 de noviembre de 2022.
- Evidencia de envío de demanda, pruebas y anexos a las partes demandadas.

TESTIMONIALES:

- **MAIBRY LIZETH CALDERON ROJAS** identificada con C.C. No. 1006512067, quien podrá ser ubicada en la Carrera 16 # 11B 22 Barrio Galán, o al correo electrónico maibry_05@hotmail.com, o al abonado celular 3232896243.

- **MAUREN DANIELA CELIS HERNÁNDEZ** identificada con C.C. No. 1.117.550.456, podrá ser ubicada en la Hacienda La Miel Reductor #14 de Ibagué Tolima, o al correo electrónico dani.hernandez.1998@gmail.com, o al abonado celular 3206119650.

NOTIFICACIONES

Los demandantes, podrán ser notificados, en la Dirección calle 2F 21A-10 B/ bellavista II etapa de la ciudad de Florencia-Caquetá, al email Teresa030166@hotmail.com, o a los abonados celulares 3212298733 o 3174900539.

El suscrito Abogado, recibirá notificado en la Carrera 13 No.15-42, Oficina 301G, Piso 3, Edificio El Líder, Barrio Centro de la ciudad de Florencia-Caquetá, al correo



Multiasesorias Jurídicas
Costain



electrónico multiasesoriasjuridicascostain@gmail.com, abonados celulares 3112912893 ó 3125144234.

A los demandados:

- **EPS SANITAS**, podrá ser notificado en la Cra. 13 #1559, Florencia Caquetá, o al correo electrónico notificajudiciales@keralty.com o al abonado 3213311783.
- **UROCAQ EU IPS**, podrá ser notificado en la Carrera 8b #6-1 Florencia Caquetá o al correo electrónico atencionalusuario@clinicaurocaq.com , o al abonado 318 354 0875
- **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA**, podrá ser notificado en la Diagonal 20 #7-29, Florencia, Caquetá o al correo electrónico callhmi.seinco@gmail.com o ventanillaunica@hmi.gov.co notificacionesjudiciales@hmi.gov.co, o al abonado (+57)(608)4366464

De esta manera y con sumo respeto dejo a usted la presente demanda.

Respetuosamente,

CONSTANTINO COSTAIN FLOR CAMPO

C.C.17.639.583 de Florencia, Caquetá

T.P. 248.009 del C.S. de la J.